



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

DON JAIME VELÁZQUEZ VIOQUE, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### CERTIFICA:

Que en la Sesión nº 32/04 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 9 de septiembre de 2004, se ha adoptado el siguiente

### ACUERDO

Por el que se aprueba la:

**RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA EL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LAS ENTIDADES REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A.U Y MEDITERRÁNEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE MARZO DE 2004, POR LA QUE SE PROCEDIÓ A LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCESIONES ESPECIALES HABILITANTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, CUYA TITULARIDAD OSTENTABAN LAS SOCIEDADES RELACIONADAS EN EL ANEXO DE LA CITADA RESOLUCIÓN, EN LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS HABILITANTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE EN EL MISMO ÁMBITO TERRITORIAL.**

En relación con el recurso potestativo de reposición interpuesto por las entidades REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A.U. y MEDITERRÁNEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A.U. contra la Resolución de 25 de marzo de 2004, por la que se procede a la transformación de las concesiones especiales habilitantes para la prestación del servicio de televisión por cable, cuya titularidad ostentaban las sociedades que se relacionan en el Anexo de la citada Resolución, en las correspondientes autorizaciones administrativas habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable en el mismo ámbito territorial, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm.        del día de la fecha, la siguiente Resolución:

Resolución de        de        de 2004, recaída en el expediente AJ 2004/1180.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### HECHOS

**PRIMERO.-** Con fecha 25 de marzo de 2004, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, dictó Resolución por la que se procedía a la transformación de las concesiones especiales, habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable, y cuya titularidad ostentaban las entidades que se relacionaban en el Anexo de la misma Resolución, en las correspondientes autorizaciones administrativas habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable.

**SEGUNDO.-** Con fecha 2 de julio de 2004, se recibió en esta Comisión escrito presentado por Doña María Consuelo Roger Rull, por medio del cual interpone, en nombre y representación de las entidades REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A.U y MEDITERRÁNEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A., recurso potestativo de reposición por el que impugna parcialmente la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la que se refiere el hecho anterior. En concreto, el recurso se interpone:

- a) Contra el apartado séptimo de la Resolución, en la medida en que no prevé como causa de extinción de las autorizaciones resultantes de la transformación, la consistente en que transcurra el plazo de duración de las concesiones especiales transformadas previsto en la Disposición transitoria primera de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones.
- b) Contra el Anexo de la Resolución impugnada, en la medida en que se incluye dentro del mismo a la entidad TELE SATÉLITE MAZARRÓN, S.L. (en adelante, TELE SATÉLITE MAZARRÓN).

Tras solicitar la admisión del recurso a trámite, la entidad recurrente pide que se dicte una nueva resolución por la que se declare:

- 1. En relación con el apartado Séptimo de la Resolución, su invalidez, debiendo extinguirse las autorizaciones resultantes de la transformación una vez transcurrido el plazo de duración de las concesiones especiales transformadas.
- 2. En relación con el Anexo de la Resolución de 25 de marzo de 2004, la invalidez de la inclusión dentro del mismo de la entidad TELE SATÉLITE MAZARRÓN y, en consecuencia, la invalidez de la autorización para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable que se ha otorgado a dicha sociedad en virtud de la citada Resolución.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes,

### FUNDAMENTOS DE DERECHO



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### **I.- Fundamentos jurídicos procedimentales.**

#### **PRIMERO.- Calificación del escrito.**

El artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) establece que contra las resoluciones (entre otros actos) podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley.

A su vez, el artículo 116.1 de la LRJPAC establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Las recurrentes califican expresamente su escrito de fecha 2 de julio de 2004, con entrada en el Registro de esta Comisión el mismo día, como recurso de reposición, por lo que teniendo en cuenta lo anterior y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel), las Resoluciones de esta Comisión ponen fin a la vía administrativa, procede calificar el escrito presentado como un recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de esta Comisión de fecha 25 de marzo de 2004.

#### **SEGUNDO.- Competencia y plazo para resolver.**

La competencia para resolver el presente recurso corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.

A su vez, según lo establecido en el artículo 117.2 de la misma Ley, el presente recurso deberá ser resuelto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su interposición.

#### **TERCERO.- Admisión a trámite.**

El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha en la que las entidades recurrentes han tenido conocimiento de la Resolución impugnada, previsto en el artículo 117 de la LRJPAC y cumpliendo con todos los requisitos de forma establecidos en el artículo 110.1 de la misma Ley, por lo que debe entenderse interpuesto en tiempo y forma procediendo su admisión a trámite.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### II.- Fundamentos jurídicos materiales.

#### **PRIMERO.- Sobre la invalidez del apartado Séptimo de la Resolución impugnada.**

Se alega la invalidez del apartado séptimo de la Resolución impugnada por cuanto que, a juicio de las recurrentes, vulnera lo dispuesto en la Disposición transitoria décima de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante LGTel) al desconocer el concepto mismo de transformación empleado por la citada Disposición transitoria. Según las recurrentes, la transformación prevista en la Ley no puede afectar a los elementos esenciales del título transformado, que, en todo caso, comprenden los servicios a prestar, el ámbito territorial de tal prestación y el ámbito temporal de la misma. A tal efecto, entienden que la Resolución impugnada no ha tenido en cuenta convenientemente la finalidad del régimen transitorio diseñado por el legislador que es la de mantener el *status quo* hasta el 31 de diciembre de 2009, permitiendo a los operadores adjudicatarios de los concursos convocados al amparo de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable (en adelante, Ley del Cable) amortizar las cuantiosas inversiones realizadas y obtener una posición competitiva en el mercado acorde con éstas. A su juicio, tal finalidad se desatiende por la Resolución objeto de recurso, al permitir seguir operando, sin limitación temporal alguna, a los operadores que no resultaron adjudicatarios de concursos y simplemente se vieron tutelados durante un período transitorio al objeto de poder amortizar sus propias inversiones.

Frente a lo expuesto por las recurrentes, cabe señalar que hasta la entrada en vigor de la LGTel, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la parcialmente derogada Ley del Cable, los servicios de difusión por cable tenían la naturaleza jurídica de servicios públicos, de modo que la gestión indirecta de dichos servicios, por parte de entidades privadas, requería de la previa obtención de la correspondiente concesión administrativa otorgada por la Administración titular del servicio que se iba a prestar.

Sin embargo, la naturaleza pública de estos servicios ha sido suprimida por la Disposición adicional décima de la LGTel en la que se produce la *despublicatio* de tales servicios en los siguientes términos:

*“Los servicios de difusión de radio y televisión por cable se prestarán en régimen de libre competencia, en las condiciones que se establezcan por el Gobierno mediante reglamento. Para su prestación en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma será preceptiva la previa obtención de una autorización administrativa estatal y su inscripción en el registro que a tal efecto se llevará en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.*

*Los operadores cuyo ámbito territorial de actuación no exceda del correspondiente al de una comunidad autónoma deberán solicitar la autorización al órgano competente de la misma. Dichas autorizaciones se inscribirán en los registros establecidos al efecto por cada*



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*comunidad autónoma. Tales inscripciones deberán comunicarse al registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a efectos meramente informativos.*

*(...)”*

En atención a la citada Disposición adicional, la prestación de estos servicios por los particulares ya no requiere de la previa obtención de una concesión administrativa sino de una autorización administrativa otorgada, según el ámbito territorial de extensión del servicio, por la Administración General del Estado, o por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma.

No obstante la privatización del servicio operada, la Disposición transitoria décima establece una moratoria para el otorgamiento de nuevas autorizaciones, hasta el 31 de diciembre de 2009, salvo que el Gobierno a partir del 31 de diciembre de 2005 y previo informe de esta Comisión considere conveniente modificar el término de la misma. Lo anterior es sin perjuicio de que, una vez aprobado el Reglamento a que se refiere la Disposición adicional décima, se puedan otorgar nuevas autorizaciones en las demarcaciones constituidas conforme a la Ley del Cable en las que los concursos convocados al amparo de la citada Ley hayan quedado desiertos.

Para posibilitar que el servicio se siga prestando por los operadores habilitados hasta el momento para la prestación de los servicios de difusión por cable, la misma Disposición transitoria décima dispone un sistema de transformación inmediata de los anteriores títulos a cargo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en los siguientes términos:

*“Los títulos habilitantes otorgados para los servicios de difusión de radio y televisión por cable y los que se encuentren en proceso de otorgamiento al amparo de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable, se transformarán de manera inmediata por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en la correspondiente autorización administrativa. Si el ámbito territorial de actuación del servicio no excediera del correspondiente a una comunidad autónoma, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones comunicará al órgano competente de la comunidad autónoma la transformación en autorización administrativa. Hasta que se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición adicional décima de esta ley, a las autorizaciones que resulten de la transformación prevista en el párrafo anterior les serán de aplicación los artículos 10.1, 10.2 y 12 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre de Telecomunicaciones por Cable.”*

En atención a todo lo anterior, aquellos operadores que, con anterioridad a la entrada en vigor de la LGTel, hubieran obtenido títulos habilitantes para prestar el servicio de difusión por cable podrán continuar prestando el citado servicio, ya que desde la entrada en vigor de la LGTel tales operadores tenían derecho a la transformación inmediata de su título en una autorización administrativa.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Como es bien sabido, a la entrada en vigor de la LGTel existían vigentes varios tipos de títulos habilitantes para la prestación de servicios de televisión por cable: i) concesiones definitivas, ii) concesiones provisionales, iii) habilitaciones ex lege y iv) concesiones especiales. No obstante, la norma que prevé la transformación no hace distinción alguna en cuanto a estos tipos de títulos sino que los engloba a todos en el concepto de “*títulos habilitantes otorgados*”.

A la vista de lo anterior, debemos entender que la norma ha querido que se transformen en el mismo tipo de autorizaciones, con los mismos derechos y obligaciones, todos los tipos de habilitaciones que venían amparando, antes de la entrada en vigor de la nueva LGTel, el servicio de difusión de televisión por cable, cualquiera que fuera su origen y/o naturaleza jurídica.

Nótese que si la norma hubiera querido referirse sólo a las concesiones definitivas otorgadas de conformidad con los concursos convocados al amparo de la derogada Ley del Cable o si hubiera querido establecer regímenes diferentes para unos y otros tipos de títulos, así lo habría contemplado expresamente. Es más, el hecho de que la Disposición transitoria décima se refiera al concepto de “*títulos habilitantes*” y no al concepto de “*concesiones*”, ha permitido transformar en las correspondientes autorizaciones administrativas a la habilitaciones “*ex lege*” y a aquellas concesiones provisionales y especiales que habiendo agotado su período de vigencia hubieran continuado amparando la prestación del servicio por no haber, el concesionario definitivo, iniciado la prestación del servicio en un ámbito territorial coincidente con el de la concesión provisional, “*ex lege*” o especial.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la “*despublicatio*” del servicio se ha producido de forma automática con la entrada en vigor de la nueva LGTel. Desde ese momento, ha quedado derogado el régimen de derechos exclusivos que amparaba a los titulares de las concesiones definitivas. Por lo tanto, desde la entrada en vigor de la LGTel, ningún operador que preste el servicio al amparo de un título obtenido de conformidad con la normativa anterior, podrá ser obligado a cesar en la actividad ni aún en el caso de que inicie la prestación del servicio un operador que viniera habilitado por una concesión definitiva, ya que estas concesiones se han extinguido automáticamente con la entrada en vigor de la nueva LGTel y la prestación del servicio se encuentra ahora liberalizada.

Lo anterior no se opone en absoluto al régimen transitorio establecido en la Disposición transitoria décima de la LGTel, ya que la finalidad del mantenimiento del *status quo*, que las recurrentes atribuyen a la citada disposición, ha de predicarse de la situación del sector en su conjunto, esto es, la situación de todos los operadores con título a la entrada en vigor de la LGTel, o, lo que es lo mismo, a la situación en el sector operante en el momento de producirse la privatización del servicio. A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la transformación de las concesiones denominadas “definitivas” ha supuesto, como hemos dicho, la derogación del régimen de derechos exclusivos de estos operadores, así como la eliminación de las





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

obligaciones y compromisos a los que estaban obligados en su condición de adjudicatarios de los respectivos concursos públicos convocados al amparo de la Ley del Cable.

Precisamente, el régimen de acceso a través de concursos públicos, con el otorgamiento de derechos exclusivos y su contrapartida de obligaciones, era el que daba carta de naturaleza a la previsión normativa que permitía la competencia restringida en el sector a favor de los operadores titulares de las concesiones definitivas. Mantener este régimen de competencia restringida, como reclaman las recurrentes, haría necesario el mantenimiento de las obligaciones establecidas en los concursos públicos por los que se otorgaron las respectivas concesiones, incluido el plazo de 25 años de duración de la concesión definitiva, así como, los avales, garantías, compromisos de calidad, de inversión, entre otros, previstos en los mismos.

En cuanto al procedimiento para la transformación, la LGTel no prevé ninguno de forma específica. Las únicas previsiones que establece son que la transformación sería realizada de forma inmediata por esta Comisión y que, si el ámbito territorial de actuación del servicio no excedía del correspondiente a una comunidad autónoma, esta Comisión debía comunicar al órgano competente de cada comunidad autónoma la transformación en autorización administrativa practicada.

Por lo que se refiere a las condiciones que se pueden establecer en las autorizaciones administrativas resultantes de la transformación, el párrafo segundo de la Disposición transitoria décima establece que *“hasta que se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición adicional décima de esta Ley, a las autorizaciones que resulten de la transformación prevista en el párrafo anterior les serán de aplicación los artículos 10.1, 10.2 y 12 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre de Telecomunicaciones por Cable.”* Esto es, las condiciones relativas a la obligación de transmitir programas audiovisuales propiedad de programadores independientes y las relativas a los contenidos de la programación con respecto a la protección de la juventud y de la infancia y otros bienes o derechos protegidos.

Por otra parte, en cuanto a la programación, les son de aplicación lo dispuesto en la Ley 25/1994, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CE sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio. Esta Ley, que sigue vigente, establece en su artículo 2.1 que se aplica a las emisiones de televisión realizadas por los operadores de televisión establecidos en España.

Finalmente, los titulares de las autorizaciones deberán cumplir con las obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de radiodifusión y televisión, televisión de formato ancho y obligaciones de retransmisión que, en su caso, se le puedan imponer de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional séptima de la Ley



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

General de Telecomunicaciones. No obstante, hasta que se desarrollen reglamentariamente los apartados 1 y 2 de la citada Disposición adicional, deberán cumplir, en la prestación del servicio, las obligaciones contenidas en la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 95/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector, modificada por el Real Decreto Ley 16/1997, de 13 de septiembre.

Por tanto, las normas que regulan la transformación de las citadas concesiones, sólo regulan, como elementos esenciales, determinadas obligaciones a las que se ha hecho referencia más arriba, pero, en ningún momento se refiere al ámbito temporal de la autorización. Todo ello, sin perjuicio de lo que al respecto diga el Reglamento a que se refiere la Disposición adicional de continua referencia. Circunstancia esta que se pone de manifiesto en el apartado tercero *in fine* de la propia Resolución impugnada.

### **SEGUNDO.- Sobre la invalidez del Anexo de la Resolución impugnada.**

En lo que se refiere a la impugnación del Anexo de la Resolución de 25 de marzo de 2004, las recurrentes se limitan a poner de manifiesto la imposibilidad de que la entidad TELE SATÉLITE MAZARRÓN, aparezca como entidad titular de una autorización resultante de la transformación de su anterior concesión especial, cuando también figura como titular de una autorización para el mismo servicio y con el mismo ámbito de cobertura, resultante de la transformación de una anterior concesión provisional, según resulta de la Resolución de esta Comisión de fecha 11 de marzo de 2004.

A este respecto, TELE SATÉLITE MAZARRÓN era titular de una concesión provisional para prestar el servicio de televisión por cable en la localidad de Mazarrón (Murcia), otorgada por Resolución de la entonces Dirección General de Telecomunicaciones, de fecha 28 de noviembre de 1996.

Posteriormente, mediante escrito de 27 de noviembre de 1997, recibido en esta Comisión el día 5 de diciembre del mismo año, la sociedad interesada solicitó ante esta Comisión, el otorgamiento de una concesión especial a la que se refiere la Disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 6/1996, de 7 de junio y la vigente Disposición transitoria primera de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, que derogó el anterior Real Decreto-Ley. La citada solicitud se tramitó por medio del expediente CAB/ESP/025.

Con anterioridad, la sociedad interesada había presentado, ante la Secretaría General de Telecomunicaciones, del Ministerio de Fomento, sendos escritos, los días 30 de julio de 1996 y 20 de mayo de 1997, solicitando acogerse a los beneficios del párrafo primero de la Disposición transitoria primera del RD 6/1996 y de la Ley 12/1997.





## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 30 de abril de 1998, se desestimó la solicitud presentada por dicha entidad para el otorgamiento de una concesión especial que le habilitara para seguir realizando la prestación del servicio de televisión por cable que venía explotando en la localidad de Mazarrón (Murcia). La desestimación se fundamentó en el incumplimiento por parte del solicitante de la obligación de participar en el concurso público para la adjudicación de una concesión para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial de Región de Murcia, de acuerdo con la Disposición transitoria primera de la Ley 12/1997.

Por Sentencia de 30 de mayo de 2000, dictada por la Sala 9ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se estimó el recurso interpuesto por TELE SATÉLITE MAZARRÓN contra la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 30 de abril de 1998, declarándola no ajustada a Derecho y, en consecuencia, reconociendo el derecho de TELE SATÉLITE MAZARRÓN a obtener una concesión especial no renovable por un plazo de hasta 10 años desde la solicitud de fecha 30 de julio de 1996. Esta Sentencia ha sido declarada firme por Sentencia de 1 de julio de 2002, dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En cumplimiento de la sentencia de 30 de mayo de 2000, TELE SATÉLITE MAZARRÓN, S.L. resultó titular de una concesión especial para prestar el servicio de televisión por cable por un plazo de 10 años computados desde la fecha de solicitud ante el Ministerio, el día 30 de julio de 1996, por lo que dicho título estaría vigente hasta el día 30 de julio de 2006.

En consecuencia, dicha concesión se ha transformado de forma correcta por la Resolución ahora impugnada, en la correspondiente autorización administrativa.

Por todo lo expuesto anteriormente, cabe concluir que, por haberse procedido a la transformación de las concesiones especiales habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décima de la LGTel, y por haberse incluido debidamente en el Anexo de la Resolución impugnada a la entidad TELE SATÉLITE MAZARRÓN, S.L., debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmar la Resolución impugnada por resultar conforme a Derecho.

Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

### RESUELVE

Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por las entidades REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A.U. y MEDITERRÁNEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A.U. contra la Resolución de 25 de marzo de 2004, por la que se procede a la transformación de las concesiones especiales habilitantes para la prestación del servicio de televisión por cable, cuya titularidad ostentaban las



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

sociedades que se relacionan en el Anexo de la citada Resolución, en las correspondientes autorizaciones administrativas habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable en el mismo ámbito territorial.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que desestima un recurso potestativo de reposición, no puede interponerse de nuevo dicho recurso de reposición. No obstante, contra la misma puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Jaime Velázquez Vioque

Carlos Bustelo García del Real